

# Reflexiones sobre la experiencia personal en el ejercicio de protección de menores conjuntamente con la policía

M<sup>a</sup> del Carmen CASTILLEJO GARCÍA\*

## Resumen

*Se necesita un equipo multidisciplinar para precisar el exacto significado de los términos "desprotección" y "desamparo", porque son muchos los criterios de definición que pueden emplearse. La autora reflexiona y se plantea interrogantes a partir de su pasada experiencia profesional. Retirar al menor de su ambiente familiar, con el fin de garantizar mejor su protección en los centros de que dispone la Comunidad de Madrid es una decisión de una complejidad mucho mayor de lo que parece en el cumplimiento material de la norma.*

## Abstract

*REFLECTIONS ON THE EXPERIENCES OF A SOCIAL WORKER EXERCISING MINORS PROTECTION TOGETHER WITH THE POLICE.*

*A multidisciplinary team is needed to define precisely the exact meaning of the terms 'unprotection' and 'helplessness' seeing that the definition criteria to be used are so many. The author arises questions from her past professional experience. To remove the minor from his family environment in order to better guarantee his protection in centres of the Regional Government of Madrid is a decision much more complex than it seems within the material compliance/fulfilment of the rule.*

**H**an pasado más de cinco años desde que ocurrieron los hechos, sin embargo, intentaré recordar, lo mejor posible, la experiencia vivida en un trabajo, realizado en colaboración con la Policía, en relación con los niños y en el ámbito laboral del Servicio de Protección de Menores de la Comunidad Autónoma de Madrid. La ventaja de exponer y analizar retrospectivamente la situación es la objetividad que da la distancia en el

tiempo, dentro de lo subjetivo que es la exposición de una experiencia personal.

La Consejería de Integración Social ejerce, a través del Instituto Madrileño del Menor y la Familia y en el ámbito de Comunidad Autónoma de Madrid, la tutela de los menores que se encuentran en situación de desamparo, así como la guarda de menores, en los términos que establece el Código Civil y la Ley 6/1995 de 28 de

\* Licenciada en Sociología y Diplomada en Trabajo Social. Profesora Asociada en la EUTS de la UCM.

Marzo, de garantías de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid.

Así nos lo dice la Ley 21/1987 del 11 de Noviembre y los Decretos 71/1992 del 12 de Noviembre y el 121/1988 del 23 de Noviembre que modifica al anterior, reguladores del procedimiento de constitución y ejercicio de tutela y guarda del menor que, junto con la Ley 6/1995 de 28 de Marzo, constituye el marco normativo de referencia del momento actual.

En la aplicación de la legislación citada surgen problemas que, fundamentalmente, radican en el término "desamparo", en exceso ambiguo, puesto que no todos los profesionales tenemos y aplicamos el mismo concepto de él.

Se hace esta introducción porque la experiencia que voy a describir tiene mucho o todo que ver con la diferente interpretación y aplicación del concepto de desamparo del menor.

En los casos en que los padres no han querido, voluntariamente, ingresar a los menores y que "carecen" de protección en los ambientes familiares, por los diversos motivos que sean, porque los familiares no puedan económicamente, porque la vivienda no reúna las condiciones de habitabilidad más adecuadas, bien por la imposibilidad circunstancial o por dejación de sus derechos y deberes hacia el menor, la Comunidad de Madrid, a través de la Comisión de Tutela, solicita los servicios de la Policía para ingresar a los menores en los Centros de Protección que a tal fin dispone el Instituto Madrileño del Menor y la Fa-

milia (I.M.M.F.), dependiente de la Consejería de Integración Social de la Comunidad Autónoma de Madrid. Este servicio se viene realizando, desde su comienzo, con la presencia de Asistentes Sociales o Trabajadores Sociales de la Consejería.

En varias ocasiones me ha correspondido acompañar a la Policía y realizar alguno de los servicios mencionados. En cada uno de ellos tuve experiencias diferentes, unas veces porque el equipo de profesionales era diferente: Policía Municipal, Policía Nacional o GRUME y otras veces porque las situaciones de intervención eran distintas.

En una de las ocasiones que se me asignó recoger unos niños; el equipo de asistencia requerido y necesario fue de seis coches patrulla y un furgón policial. La situación fue muy tensa, personalmente de pánico, porque el vecindario y los familiares de los niños se amotinaron ante la Policía, utilizando fuerza verbal y lanzamiento de piedras para que no nos lleváramos a los niños. Antes de que se precipitaran los acontecimientos, hubo un primer tiempo de información a los familiares, sobre lo que suponía el arrebatar a sus hijos, al final del cual se les prestó asesoramiento sobre las medidas que podían tomar contra Administración, puesto que ella había llevado a cabo la ejecución de la medida.

En aquella situación, mis sentimientos fueron variados y complejos:

— **Duda.** Tanto la madre como los niños se aferraban mutuamente y cabría interpretar que abandono afec-

tivo no existía. Por otra parte las condiciones de la vivienda no parecían reunir los mínimos de habitabilidad exigibles. Los niños estaban descalzos, a pesar de acaecer estos hechos a finales del mes de Julio. Como profesional ponía en entredicho la actuación como la más apropiada a los hechos que estaba observando.

— **Cariño y afecto** hacia unos menores que supuestamente estaban abandonados. Con la actuación tendrían materialmente de todo, excepto del afecto constante de su madre.

— **Comprensión hacia la madre.** A su situación de necesidad económica y de vivienda expuesta y constatada, se sumaba la de separación física de sus hijos, a pesar de que su situación mejoraría en todos los aspectos referentes a nivel educativo y cuidados físicos y materiales.

— **Cumplimiento con un mandato profesional.** Y a continuación, al día siguiente, tendría que recibir en despacho a la familia e informarle de sus derechos y atender a sus necesidades.

La actuación policial fue estricta y puntual: llevar a cabo la Orden que se le había dado. Después de dialogar durante dos horas con los familiares, se consiguió su consentimiento con la condición de que nos acompañaran algunos de ellos hasta el Centro donde iban a quedar internados los niños. Este condicionante fue decisivo y sin él no hubiera podido realizarse el servicio sin ausencia de violencia física.

Esta experiencia, a mi juicio muy dura, dio origen a un escrito a la Di-

rección General por parte de los profesionales. En él se exponía los motivos por los cuales creíamos que los profesionales que acompañaban a la Policía para realizar este tipo de servicio de recogida de niños en desamparo, no deberían ser los mismos que, al día siguiente, recibieran a las familias ya que éstas responsabilizaban al Trabajador Social del hecho de que se les hubiera arrebatado a sus hijos. Por tanto, sus sentimientos no eran los más propicios para realizar la entrevista en las mejores condiciones posibles de entendimiento y comprensión, al realizar el ejercicio de protección del o los menores.

Además, éramos únicamente los Trabajadores Sociales los responsables de llevar a cabo dicha función y nos preguntábamos, por qué no otros profesionales (médico, psicólogo, etc.) pudieran ser los encargados de acompañar a la Policía, en el servicio de recogida de niños en desamparo.

Después de este escrito, el servicio pasó a realizarse por el GRUME, policía especializada en menores y encargada de las funciones de búsqueda y recogida de menores.

Aunque los trabajadores sociales continuamos acompañando al GRUME en la prestación del servicio, las condiciones fueron muy diferentes. Previamente, Trabajador Social y GRUME planificaban la forma de llevar a cabo el servicio, fuera del ambiente familiar, de forma que los menores no tuvieran que sufrir una separación directa de la familia, como por ejemplo, recogerlos en el Colegio acordándose previamente con la Di-

rección del Centro y apoyados por la misma, los policías vestidos de paisano y el coche utilizado sin ningún signo externo de pertenecer a la policía.

En el primer servicio realizado bajo estas condiciones, me fue adscrita la responsabilidad de llevarlo a cabo. Tardamos dos días en hacerlo efectivo. En mi opinión los niños no sufrieron, en apariencia, trauma alguno, nos acompañaron gustosos a, lo que para ellos, era otro colegio en el que le hacía ilusión ingresar. Durante el traslado nos relataron hechos familiares que denotaban situación clara de desamparo y abandono.

En la actualidad, se realiza el servicio mediante un equipo en coordinación con el GRUME y, excepcionalmente, con otros profesionales que antes no intervenían: médico, psicólogo o psiquiatra, en función de las necesidades detectadas y que presumiblemente se consideraban necesarios según el caso objeto de intervención. En coordinación, los profesionales implicados en el proceso de intervención planifican y estudian la mejor manera de llevarlo a cabo, dando cumplimiento a los objetivos de protección de los menores en situación de abandono.

El objeto de esta reflexión es terminar con unos interrogantes que nos cuestionen a los profesionales y, al tiempo, ayuden a pensar para actuar con prudencia ante situaciones familiares problemáticas y complejas:

¿Estamos los trabajadores Sociales especialmente preparados para llevar a término actuaciones como las

de quitar los hijos a sus padres o familiares? ¿Hay otros profesionales mejor preparados para ello? ¿Es ventajoso estudiar y planificar en equipo las actuaciones? ¿Se estudian con detalle todos los pasos a seguir y se actúa con o sin rapidez y discreción, dándose prioridad a la rapidez de la urgencia, en detrimento de la planificación? ¿Se observa con anterioridad algún modo de prevenir para no intervenir?

Si somos capaces de responder con objetividad a éstas y otras preguntas que cada profesional llegue a formularse, llegaremos a la conclusión de que:

— Muchas intervenciones, la mayoría de ellas, cambiarían de forma en la ejecución de la medida.

— Disminuirían las intervenciones policiales porque no daría lugar a ellas por haberse actuado de manera preventiva.

— Formarían parte del equipo de trabajo, otros profesionales: psicólogo o psiquiatra, médico, A.T.S., etc. además del trabajador social, dado que las condiciones psicosomáticas en que se encuentran, tanto los menores como sus familiares, requiere un servicio específico a sus necesidades.

— Se planificará siempre, paso a paso, cada intervención con objeto de que no sea traumática la separación de los menores de sus familiares.

Mi respuesta a todas ellas es proponer como modelo de intervención:

1º. Planificación de cada intervención de forma individualizada, dedicando medios abundantes de refle-

xión y en equipo, con ayuda de otros profesionales especializados en materias no propias del trabajador social: policía, juristas, médicos, psicólogos, etc..

2º. Que la toma de cada decisión tenga por objeto minimizar el o los perjuicios que puedan causarse a los menores implicados.

3º. Tener la plena seguridad de que la medida es la única viable y la mejor en el ejercicio de protección de menores.

4º. Una vez tomada la decisión, actuar sin dilación, con discreción y contundencia, procurando salirse lo menos posible de lo planificado y, en

situaciones imprevistas, tomar decisiones razonadas y rápidas.

5º. El resultado final será una intervención con calidad profesional por parte de todo el equipo que lleve a término la ejecución del servicio, en beneficio de la protección del menor, sin olvidar que el destino final del menor deberá ser siempre el seno de la FAMILIA.

**Nota:** *En el caso descrito al principio, pasados unos meses, un año, el Juzgado emitió sentencia de devolución de los menores a sus padres.*

---

M<sup>a</sup> del Carmen CASTILLEJO GARCÍA  
Escuela Universitaria de Trabajo Social